



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia



SCS780-1-6  
**SIGCMA-SGC**

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

<b>RADICADO:</b>	<a href="#">680012333000-2024-00044-00</a>
<b>MEDIO DE CONTROL:</b>	NULIDAD ELECTORAL
<b>DEMANDANTE:</b>	TANIA LIZETH BAUTISTA PEÑALOZA <a href="mailto:demandaflorida@hotmail.com">demandaflorida@hotmail.com</a>
<b>DEMANDADO:</b>	EDGAR ENRIQUE GOMEZ SILVA CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA PARA EL PERIODO 2024-2024 <a href="mailto:lillasconcejaj1@gmail.com">lillasconcejaj1@gmail.com</a> <a href="mailto:accionyjusticiaconsultores@gmail.com">accionyjusticiaconsultores@gmail.com</a>  CONSEJO NACIONAL ELECTORAL <a href="mailto:cnenotificaciones@cne.gov.co">cnenotificaciones@cne.gov.co</a>  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL <a href="mailto:notificacionjudicial@registraduria.gov.co">notificacionjudicial@registraduria.gov.co</a>
<b>MINISTERIO PÚBLICO:</b>	EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR <a href="mailto:eavillamizar@procuraduria.gov.co">eavillamizar@procuraduria.gov.co</a>
<b>AUTO No:</b>	156
<b>ASUNTO:</b>	AUTO RESUELVE ADMISIÓN Y MEDIDA PROVISIONAL
<b>MAGISTRADA PONENTE:</b>	CAROLINA ARIAS FERREIRA

Procede la Sala a pronunciarse sobre i) la admisibilidad de la demanda de nulidad electoral presentada contra la elección del CONCEJAL de FLORIDABLANCA (SANTANDER) – EDGAR ENRIQUE GOMEZ SILVA para el período constitucional 2024-2027 y ii) la solicitud de suspensión provisional de los efectos de dicho acto.



## I. ANTECEDENTES

### 1. La demanda

La señora TANIA LIZETH BAUTISTA PEÑALOZA interpuso demanda de nulidad electoral en contra del formulario E26 CON – de fecha 6 de noviembre de 2023, por medio del cual se declara la elección de la señora EDGAR ENRIQUE GOMEZ SILVA como CONCEJAL de FLORIDABLANCA, (SANTANDER) para el periodo constitucional 2024-2027.

En el mismo escrito de la demanda, la parte actora solicitó la suspensión provisional del acto acusado.

### 2. Normas violadas y concepto de violación

La parte actora alegó que la elección declarada mediante el acto demandado va en contravía de lo establecido en el numeral 5 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011<sup>1</sup>, y los artículos 4, 109 y 258 Constitucionales<sup>2</sup>, y sentencia de la corte Constitucional C 490 de 2011<sup>3</sup>, lo anterior por cuanto la campaña electoral del demandado, estuvo financiada con aportes provenientes del mismo candidato, quien se encuentra imputado por delitos contra la administración pública, por lo cual considera la parte actora que el acto que declaró la elección se torna en irregular, por vulnerar las normas en que debería fundarse.

### 3. Traslado de la medida cautelar

<sup>1</sup> **ARTÍCULO 27. FINANCIACIÓN PROHIBIDA.** Se prohíben las siguientes fuentes de financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas:

5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad.

<sup>2</sup> **ARTICULO 4o.** La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

**ARTICULO 109.** <Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley.

Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con Personería Jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas parcialmente con recursos estatales.

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación.

También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.

Un porcentaje de esta financiación se entregará a partidos y movimientos con Personería Jurídica vigente, y a los grupos significativos de ciudadanos que avalen candidatos, previamente a la elección, o las consultas de acuerdo con las condiciones y garantías que determine la ley y con autorización del Consejo Nacional Electoral.

**ARTICULO 258.** <Artículo modificado por el artículo 11 del Acto Legislativo 1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualmente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos.

<sup>3</sup> Sentencia C-490/11 PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE REFORMA POLITICA SOBRE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS Y PROCESOS ELECTORALES - CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRAMITE LEGISLATIVO DE PROYECTOS DE LEY ESTATUTARIA-Requisitos especiales



Por auto del 16 de febrero de 2024, se corrió traslado a las partes y a la Procuradora Judicial de la solicitud de suspensión provisional que presentó el accionante.

**3.1 Edgar Enrique Gómez Silva**<sup>4</sup> por medio de apoderado judicial, solicitó no acceder al decreto de la medida cautelar, alegando que no es posible establecer la autenticidad de los documentos anexos a la demanda por la parte actora, y en esta etapa procesal no se puede establecer si el demandado tiene una acusación penal de la que habla el artículo 27 Numeral 5 de la Ley 1475 de 2011, pues considera que no toda acusación penal tiene relevancia jurídica para que la prohibición a la que alude la norma, ya que la imputación o acusación debe estar relacionada con los delitos que enlistados en ella.

Adicionalmente expuso que la autofinanciación de un candidato a un cargo de elección popular que tiene acusación penal en contra no está prohibida por el artículo 27 numeral 5 de la Ley 1475 de 2011, pues según la Corte Constitucional, la conducta prohibida es la de recibir financiación y no la de autofinanciarse, según lo señalado en la Sentencia C-490 de 2011, a través de la cual se realizó el control previo de constitucionalidad sobre el respectivo proyecto de ley estatutaria, e indicó que la prohibición aplica respecto de recibir de personas naturales más no de la financiación que pueda hacer el candidato con recursos propios.

Alegó que la declaratoria de nulidad electoral no es una sanción, pero si obra como una restricción al sufragio pasivo, y señaló que hasta tanto no se cuente con sentencia judicial en firme que imponga una condena en contra del demandado, no es posible anticipar los efectos de la misma.

**3.2 Registraduría Nacional del Estado Civil**<sup>5</sup> precisó que el escrutinio de votos, así como la expedición del acta general de Escrutinio E-26, tal como lo prevé el Código Electoral les compete a las comisiones Escrutadoras, las cuales son entes independientes y autónomos, de las cuales hace parte la Registraduría en calidad de secretario. Por ello, afirmó que le asiste la falta de legitimación en la causa por pasiva como quiera que la entidad no tiene injerencia en la solicitud que eleva el demandante.

## II. CONSIDERACIONES

### 1. Competencia

---

<sup>4</sup> Índice 22-23 SAMAI

<sup>5</sup> Índice 21 SAMAI.



Esta Corporación es competente para tramitar la presente demanda, conforme a lo preceptuado en los artículos 152 numeral 7 literal a)<sup>6</sup> del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De igual manera, la Sala es competente para resolver sobre la admisión de la demanda y la petición de medida cautelar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.2 literal f)<sup>7</sup> y el último inciso del artículo 277<sup>8</sup> de la citada ley.

## 2. Admisión de la demanda

**2.1.** Compete a la Sala pronunciarse sobre la admisión de la demanda, para lo cual se debe establecer el cumplimiento de los requisitos enlistados en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, para ello es del caso verificar los anexos relacionados en el artículo 166 y el ejercicio del medio de control dentro del plazo previsto en el literal a) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**2.2.** Al respecto encuentra la Sala que la demanda se ajusta formalmente a las exigencias requeridas, pues están identificadas las partes y sus datos para notificación, las pretensiones y el acto demandado fueron formulados de manera clara, se narran los hechos en que se fundamenta la demanda y se señalaron las normas que alega como violadas, así como el concepto de violación y se allegó copia del acto acusado, el cual fue proferido **el 6 de noviembre de 2023 y la demanda se presentó el 11 de enero de 2024**, es decir dentro de los 30 días hábiles siguientes a su publicación.

## 3. Resolución de la medida cautelar

---

6 7. ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:

a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración;

7 ARTÍCULO 125. DE LA EXPEDICIÓN DE PROVIDENCIAS. <Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas:

1. Corresponderá a los jueces proferir los autos y las sentencias.

2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias:  
(...)

f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala;

8 ARTÍCULO 277. CONTENIDO DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA Y FORMAS DE PRACTICAR SU NOTIFICACIÓN. Si la demanda reúne los requisitos legales se admitirá mediante auto, en el que se dispondrá:  
(...)

6. Que, en tratándose de elección por voto popular, se informe al presidente de la respectiva corporación pública, para que por su conducto se entere a los miembros de la corporación que han sido demandados.



Para resolver la medida cautelar, recuerda la Sala que el accionante solicitó que se decrete la suspensión provisional del acto de escrutinio **E26 CON – del día 6 de noviembre de 2023**, expedida por la Comisión Escrutadora del municipal de FLORIDABLANCA (SANTANDER).

## Marco normativo y jurisprudencial

### Suspensión provisional de actos administrativos

De acuerdo con el artículo 238 de la Constitución Política, la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la prerrogativa, por los motivos y con los requisitos que establezca la Ley, de suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos que sean pasibles del control de legalidad.

En cuanto a la procedencia de las medidas cautelares, la Ley 1437 de 2011 ha indicado lo siguiente:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, **la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.** Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (...)» (Subrayas y negrillas propias).

Del mismo modo, en materia de medidas cautelares se exigen requisitos generales de origen formal, generales o comunes,<sup>9</sup> que son: (1) tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo;<sup>10</sup> (2) existir solicitud de parte<sup>11</sup> debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos donde opera de oficio.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> En la medida que se exigen para todas las medidas cautelares.

<sup>10</sup> Artículo 229, Ley 1437 de 2011.

<sup>11</sup> De conformidad con el párrafo del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las únicas medidas que pueden ser declaradas de oficio por el juez son las "medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo".

<sup>12</sup> Artículo 229, Ley 1437 de 2011.



Respecto de las medidas cautelares en proceso de nulidad electoral, y en concordancia con la norma citada, la Sección Quinta del Consejo de Estado<sup>13</sup>, precisó lo siguiente:

«se colige respecto de la suspensión provisional del acto en materia electoral que: (I) la solicitud del accionante procede por violación de las disposiciones normativas constitucionales o legales invocadas en el escrito correspondiente; (II) dicha violación surge del análisis del acto demandado y su cotejo con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la misma. Precizando, además, que con la expedición de la Ley 1437 de 2011, basta que se presente una violación a las disposiciones señaladas como desconocidas, en la demanda o en escrito separado antes de la admisión de esta, contravención que debe surgir del análisis por parte del juez, del acto demandado con las normas esgrimidas como violadas o, del estudio de las pruebas aportadas por el accionante con su escrito de demanda para que sea procedente la medida cautelar».

Particularmente, en relación con el proceso de nulidad electoral, el artículo 277 del CPACA establece una regla específica respecto de la suspensión provisional, que dispone:

«Artículo 277.- En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que debe solicitarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la sala o sección. Contra este auto solo procede en los procesos de única instancia el recurso de reposición y, en los de primera, el de apelación...».

#### **4. Caso concreto**

Afirma la parte demandante que el señor Edgar Enrique Gómez Silva incurrió en financiación irregular de su campaña electoral, en contravía de lo indicado en el numeral 5º del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, lo cual es causal de nulidad de los actos administrativos por infracción de las normas en que debería fundarse.

Al respecto, se trae a colación lo establecido frente a la financiación de las campañas electorales.

El artículo 109 constitucional<sup>14</sup>, establece que «Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con Personería Jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas parcialmente

<sup>13</sup> Auto de fecha 27 de octubre de 2022 proferida dentro del radicado 11001-03-28-000-2022-00271-00

<sup>14</sup> norma modificada por el acto legislativo 01 de 2009



con recursos estatales», precisando que la Ley, determinará «el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación».

De esta manera, la Constitución contempla la financiación parcial de los partidos y las campañas electorales con recursos estatales de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos<sup>15</sup>; así mismo, establece la norma constitucional, la procedibilidad de la sanción de pérdida de investidura o del cargo por la violación de los toques máximos de financiación de las campañas, estableciendo el deber de rendición de cuentas por parte de los partidos; y específicamente que la financiación privada no podrá tener «fines antidemocráticos o atentatorios del orden público».

Por su parte, la Ley Estatutaria 1475 de 2011 determina, en su artículo 20, el deber del Estado de concurrir a la financiación de la campaña electoral, junto con las siguientes fuentes de financiación privada a las cuales podrán acudir los candidatos de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos inscritos a cargos o corporaciones de elección popular:

- «1. Los recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos políticos destinen para el financiamiento de las campañas en las que participen.
2. Los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de sus compañeros permanentes, o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.
3. Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, que realicen los particulares.
4. Los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas.
5. Los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento».

Sobre ello, el artículo 20 de la Ley 1475 de 2011, como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-490 de 2011<sup>16</sup>, debe interpretarse con lo dispuesto

---

<sup>15</sup> En sentencia C-089 de 1994, la Corte Constitucional sostuvo que la ayuda financiera estatal debe ser parcial y estar encaminada a neutralizar los riesgos que implican, para una verdadera democracia, algunas de las modalidades de financiación política, desmesuradas y dirigidas a neutralizar la acción pública del candidato elegido, por parte de los grupos económicos de poder: "La razón de ser de la ayuda financiera -que es por lo tanto parcial en cuanto no puede y no debe hacerse cargo de todo el costo de la actividad político-, busco neutralizar la dependencia y servidumbre que las organizaciones políticas pueden adquirir respecto de los centros privados de poder que les prodigan su apoyo económico y pueden prevalecerse de él para derivar una malsana influencia sobre los asuntos políticos o exigir reciprocidades que deterioran la moral social y socavan la confianza en el correcto desempeño de su función representativa y mediadora, que debería inspirarse únicamente en el interés general"

<sup>16</sup> Sentencia C-490/11 PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE REFORMA POLITICA SOBRE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS Y PROCESOS ELECTORALES CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRAMITE LEGISLATIVO DE PROYECTOS DE LEY ESTATUTARIA-Requisitos especiales



en el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, que señala que está prohibido la financiación de las campañas electorales, que provengan de las siguientes fuentes:

- «1. Las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas electorales.
2. Las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines antidemocráticos o atentatorios del orden público.
3. Las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real, personal, aparente o presunto, de dominio, respecto de bienes sobre los cuales se hubiere iniciado un proceso de extinción de dominio.
4. Las contribuciones anónimas
5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad.
6. Las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, con destino a la financiación de su funcionamiento y a las campañas electorales en las que participen, de acuerdo con los límites a la financiación privada previstos en el artículo 25 de la presente ley.
7. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios estatales; que administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar.»

Ahora bien, respecto del material probatorio obrante en este momento procesal, se destaca lo siguiente:

- Anexo 8.1 Código 101 correspondiente a la «Rendición cuentas claras», en el que se determina, respecto de la financiación de la campaña electoral del demandado, los siguientes aportes entre otros: - Edgar Enrique Gómez Silva (PDF 03 expediente digital)
- Copia de REPORTE DEL PROCESO 68001600882820160062600 Donde se relaciona como demandada la señora Edgar Enrique Gómez Silva por los delitos de



PREVARICATO POR ACCIÓN, PREVARICATO POR OMISIÓN y FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL (PDF 07 expediente digital)

- Consulta efectuada en la página de la Rama Judicial de los procesos penales identificados bajo radicados 680016008828201600155008<sup>17</sup> y 68001600882820160062600<sup>18</sup>, en los cuales se advierte que a la demandada se le imputaron los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y fraude a resolución judicial.
- Copia de Formato del aplicativo «Rendición Cuentas Claras» del Consejo Nacional Electoral en el que registra que el demandado registró un total de gastos de la campaña electoral de \$ 19.267.000,00 según el formulario 8.1 Código 101; los cuales fueron financiados con «CRÉDITOS O APORTES QUE PROVENGAN DEL PATRIMONIO DE LOS CANDIDATOS, DE SUS CÓNYUGES O DE SUS COMPAÑEROS PERMANENTES, O DE SUS PARIENTES» (Anexo 8.1 Código 101) <sup>19</sup> (PDF 03 expediente digital)

Visto lo anterior, considera la Sala, que en este momento procesal no se encuentran configurados los presupuestos exigibles para declarar la suspensión provisional del acto administrativo electoral, esto por cuanto del material probatorio analizado no es posible concretar un estado de convicción que, más allá de cualquier duda razonable, permita acreditar la configuración de la financiación prohibida dispuesta en el numeral 5 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.

Lo anterior, teniendo en cuenta que obra en el expediente prueba de que el señor Edgar Enrique Gómez Silva, está siendo investigado penalmente por delitos en contra de la administración pública, como pudo verificar la Sala, a través de la consulta de procesos efectuada en el portal web de la Rama Judicial.

Sin embargo, no encuentra la Sala que exista plena claridad probatoria respecto de su calidad de aportante en la campaña electoral y la modalidad en la cual se hicieron sus aportes, pues lo cierto es, que de la revisión del aplicativo «Rendición de Cuentas Claras<sup>20</sup>», no se cuenta con registro de los aportes desglosados y los aportantes correspondientes, respecto de los cuales afirma el demandante se efectuaron en la campaña por parte del mismo candidato, comoquiera que una vez contrastada la información en el aplicativo web de cuentas claras dispuesto por el Consejo Nacional Electoral, el mismo registra un reporte general del total de los

---

<sup>18</sup> [Consulta de Procesos por Número de Radicación- Consejo Superior de la Judicatura \(ramajudicial.gov.co\)](https://www.ramajudicial.gov.co/Consulta-de-Procesos-por-Número-de-Radicación-Consejo-Superior-de-la-Judicatura)

<sup>20</sup> <https://www.cnecuentasclaras.gov.co/index.php>



ingresos de la campaña del demandado, y por lo tanto, no es posible corroborar el formato allegado por el demandante.

En línea con lo anterior, no existe claridad del origen del documento aportado junto con la demanda, del cual se dice se refiere al Anexo 8.1 Código 101 correspondiente a la Rendición cuentas claras y en el que se establecen como aportantes a la campaña del demandado bajo el concepto «CRÉDITOS O APORTES QUE PROVENGAN DEL PATRIMONIO DE LOS CANDIDATOS» de modo tal que dichos documentos deberán ser allegados por parte de la autoridad competente, en la etapa procesal correspondiente.

Así las cosas, para determinar si se incurrió en la prohibición que se le endilga al demandado, es necesario adelantar todo el debate probatorio propio de la actuación judicial, a efectos de contar con mayores elementos de juicio que permitan esclarecer si la causal de nulidad electoral se configura en este caso concreto.

Ello, sin perjuicio de lo que se logre establecer en la sentencia cuando se analicen los cargos de nulidad en confrontación con las pruebas obrantes en el expediente, y advirtiendo que las consideraciones expuestas por la Sala no implican prejuzgamiento respecto de la valoración de las pruebas que hasta el momento hacen parte del proceso.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER,**

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: ADMITIR** la demanda presentada en ejercicio del medio de control de **NULIDAD ELECTORAL**, por la señora **TANIA LIZETH BAUTISTA PEÑALOZA**, contra el acto de elección del señor **JORGE ENRIQUE GOMEZ SILVA** como **CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (SANTANDER)** para el periodo 2024-2027.

**SEGUNDO: NOTIFICAR** personalmente esta providencia al señor **JORGE ENRIQUE GOMEZ SILVA** como **CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (SANTANDER)** atendiendo lo señalado en el literal a), numeral 1º, artículo 277 del CPACA, esto es, a la dirección suministrada por el demandante, que para el caso concreto corresponde al buzón electrónico [llerasconcejal11@gmail.com](mailto:llerasconcejal11@gmail.com), [accionyjusticiaconsultores@gmail.com](mailto:accionyjusticiaconsultores@gmail.com)



**TERCERO: NOTIFICAR** personalmente de esta providencia a la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**, al **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** y a la **PROCURADORA 158 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE BUCARAMANGA**, conforme a lo señalado en el numeral 2º y 3º del artículo 277 en concordancia con el artículo 199<sup>21</sup> de la Ley 1437 de 2011, esto es, mediante mensaje de datos dirigido a los buzones de notificaciones judiciales de las respectivas entidades.

**CUARTO: NOTIFICAR** por estado la presente providencia a la parte demandante, en los términos del artículo 277, numeral 4º del CPACA.

**QUINTO: INFORMAR** a la comunidad de la existencia de este proceso a través del sitio web de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, o en su defecto por conducto de otros medios eficaces de comunicación, tales como radio o televisión institucional, de conformidad con el numeral 5º del artículo 277 ibidem.

**SEXTO:** Acorde con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 1437 de 2011, se concede un término de quince (15) días siguientes al día de la notificación del presente auto o al día de la publicación del aviso, según el caso, para contestar la demanda.

**SÉPTIMO: REQUERIR** a la **REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL** para que, en el término de traslado, aporte el expediente administrativo.

**OCTAVO: RECONOCER** personería jurídica así:

Al abogado CARLOS ARTURO DUARTE MARTINEZ identificado con C.C. 1.098.692.638 tarjeta Profesional No. 226.258 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del señor EDGAR ENRIQUE GOMEZ SILVA conforme al poder otorgado para el efecto.

Al abogado OMAR VICENTE GUEVARA PARADA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.414.049 con tarjeta profesional No. 108.887 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado principal de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, y, como apoderada suplente a la abogada ANA MARIA HERNANDEZ VALERO identificada con la cédula de ciudadanía No.1.098.727.162 y Tarjeta Profesional No. 275.531 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al poder conferido para tal efecto allegado con la contestación de la medida cautelar.

---

<sup>21</sup> Modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.



**NOVENO:** Por intermedio de la Auxiliar Judicial del Despacho, efectúense las anotaciones de rigor en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

**DÉCIMO: NEGAR** la suspensión provisional solicitada, conforme las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

**DÉCIMO PRIMERO: A partir del 22 de enero de 2024,** de conformidad con las directrices dada por el Consejo Superior de la Judicatura, las partes deberán radicar los memoriales únicamente a través de la ventanilla virtual del aplicativo SAMAI y en virtud del uso de la información y las tecnologías - TICS [Ventanilla virtual | JCA \(consejodeestado.gov.co\)](https://consejodeestado.gov.co)

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

Aprobado por la Sala como consta en Acta No. 12/2024.

Aprobado en sesión electrónica a través de la herramienta Tecnológica TEAMS, la cual de conformidad con el artículo 186 del CPACA, garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con la Ley.

**-Firmado a través del Sistema Judicial SAMAI-**

**CAROLINA ARIAS FERREIRA**

Magistrada Ponente

**-Firmado a través del Sistema Judicial SAMAI-**

**LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES**

Magistrada

**-Firmado a través del Sistema Judicial SAMAI-**

**IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA**

Magistrado